

No. 54635*

**Peru
and
Ecuador**

Agreement on the transfer of sentenced persons between the Republic of Peru and the Republic of Ecuador. Lima, 11 August 1999

Entry into force: *5 May 2000, in accordance with article XIV*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Peru, 21 August 2017*

Note: *See also annex A, No. 54635.*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pérou
et
Équateur**

Accord relatif au transfert des personnes condamnées entre la République du Pérou et la République de l'Équateur. Lima, 11 août 1999

Entrée en vigueur : *5 mai 2000, conformément à l'article XIV*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pérou, 21 août 2017*

Note : *Voir aussi annexe A, No. 54635.*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO SOBRE TRANSFERENCIA DE PERSONAS CONDENADAS
ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

La República del Perú y la República del Ecuador, en adelante, las Partes:

Animados, por el deseo de facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas, mediante la adopción de métodos adecuados:

Considerando, que deben lograrse estos objetivos otorgándoles a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional o libertad controlada, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen:

Acuerdan celebrar el siguiente Convenio

ARTICULO I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio:

1. "Sentencia", designará la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario o extraordinario contra ella en el Estado remitente o que el término para interponerlo haya fenecido.

2. "Persona Condenada", designará a una persona que cumpla una condena impuesta por sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior impugnación.

3. "Estado receptor", designará al Estado al cual la persona condenada puede ser transferida o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

4. "Estado remitente", designará al Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona condenada pueda ser transferida o lo haya sido ya.

5. "Condena", designará cualquier pena o medida privativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento penal, centro de rehabilitación social, hospital u otra institución en el Estado remitente, que haya impuesto un órgano judicial, con una duración limitada o indeterminada, por razón de un delito.

6. "Menor de Edad", designará a la persona menor de 18 años de edad.

ARTICULO II

PRINCIPIOS GENERALES

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de transferencia de personas condenadas.

2. Una persona condenada en el territorio de una Parte, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser transferida a la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin, podrá expresar, bien al Estado remitente o bien al Estado receptor, su deseo de que se le transfiera en virtud del presente instrumento internacional.

3. La transferencia podrá ser solicitado por el Estado remitente o por el Estado receptor.

ARTICULO III

CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA

El presente Convenio se aplicará bajo las siguientes condiciones:

- 1 Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.
- 2 Que la parte de la condena que faltare por cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a seis meses.
- 3 Que la sentencia sea firme o definitiva y que no queden pendientes recursos ordinarios al momento de invocar las disposiciones del Convenio
- 4 La persona transferida no podrá ser nuevamente enjuiciada en el Estado receptor por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado remitente y su posterior transferencia.
- 5 Que la persona condenada, o una persona autorizada a actuar en su nombre, cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental, una de las Partes así lo estimare necesario, consienta la transferencia.
- 6 Que la persona condenada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado remitente, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniaras de toda índole que corren a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se exceptúa a la persona condenada que acredite debidamente su absoluta insolvencia.

7. Que el Estado remitente y el Estado receptor manifiesten expresamente su acuerdo con la transferencia.

8. Que se haya conmutado una eventual pena de muerte o contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.

ARTICULO IV

OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Los Estados Partes se comprometen a poner el presente Convenio en conocimiento de cualquier persona condenada a quien pudiera aplicársele.

2. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado remitente su deseo de ser transferida en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá informar de ello al Estado receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia quede firme.

3. Las informaciones comprenderán:

- a) El nombre y apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada;
- b) En su caso, su dirección en el Estado receptor.
- c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena,
- d) La naturaleza, duración y fecha de inicio de la condena;
- e) Copia certificada de la sentencia, y
- f) Cualquier otra información que el Estado receptor pueda requerir para permitirle considerar la posibilidad de transferencia, así como para informar a la persona condenada y al Estado remitente de las consecuencias de la transferencia para la persona condenada según su ordenamiento jurídico.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado receptor su deseo de ser transferida, el Estado remitente comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el numeral 3 que antecede.

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado remitente o el Estado receptor en aplicación de los numerales precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados respecto a una petición de transferencia.

ARTICULO V

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

1 Cada transferencia de personas ecuatorianas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Ecuador al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

2. Cada transferencia de personas peruanas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.

3 Si el Estado remitente considera la petición de transferencia de la persona condenada y expresa su consentimiento, el Estado remitente comunicará lo antes posible al Estado receptor su aprobación, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar la transferencia.

4. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado remitente a las del Estado receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona condenada y de su transporte desde el Estado remitente. La entrega constará en un acta.

5. Para tomar la decisión relativa a la transferencia de una persona condenada y de conformidad con el objeto que la transferencia contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito y las posibles vinculaciones del autor con el crimen organizado, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado remitente y del Estado receptor.

6 Cuando cualquiera de las Partes no apruebe la transferencia de una persona condenada, notificará su decisión sin demora a la otra Parte, pudiendo expresar la causa o motivo de la denegatoria.

7 Negada la autorización de transferencia, el Estado receptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado remitente podrá revisar su decisión a instancia del Estado receptor cuando este alegare circunstancias excepcionales.

8 Antes de efectuarse la transferencia, el Estado remitente brindará al Estado receptor, si éste lo solicita, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado por vía diplomática por el Estado receptor de acuerdo a sus leyes, que el consentimiento de la persona condenada ha sido expresado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

9 Los gastos ocasionados con motivo de la transferencia, correrán a cargo del Estado receptor. Sin embargo, éste podrá intentar que la persona condenada devuelva la totalidad o parte de los gastos de transferencia.

ARTICULO VI

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

1. El Estado receptor, a petición del Estado remitente, facilitará a este último los documentos siguientes:

- a) Una copia de las disposiciones legales pertinentes del Estado receptor, de las cuales resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena en el Estado remitente, constituyen delito; y,
- b) Una declaración del efecto, con respecto a la persona condenada, de cualquier ley o reglamento pertinente relativo a su detención en el Estado receptor después de su transferencia.

2. Solicitada una transferencia, el Estado remitente deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se detallan, a menos que una de las Partes haya indicado su desacuerdo:

- a) Una copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención, prisión preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;
- c) Una declaración en la que conste el consentimiento para la transferencia a que se refiere el numeral 5 del artículo III otorgada ante autoridad consular competente; y,
- d) Cuando proceda, informe médico o social acerca de la persona condenada, información sobre su tratamiento en el Estado remitente y cualquier recomendación para la continuación del mismo en el Estado receptor

3. Si el Estado receptor considera que los informes suministrados por el Estado remitente no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.

4. Los documentos que se entreguen de Estado a Estado, en aplicación del presente Convenio, serán eximidos de las formalidades de legalización.

ARTICULO VII

INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

El Estado receptor facilitará información al Estado remitente acerca del cumplimiento de la condena:

- a) Cuando se haya cumplido la condena;
- b) Si la persona condenada se evadiere; o
- c) Si el Estado remitente le solicitare un informe especial.

ARTICULO VIII

JURISDICCION

El Estado remitente mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. El Estado remitente retendrá, asimismo, la facultad de indultar, conceder amnistía o clemencia a la persona condenada. El Estado receptor, al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

ARTICULO IX

CUMPLIMIENTO DE LA PENA

1. La ejecución de la pena se cumplirá de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor. En ningún caso puede modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado remitente.

2. Ninguna condena a pena privativa de libertad será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del tiempo impuesto por la sentencia del tribunal del Estado remitente.

3. Si un nacional de una parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional, de libertad condicional o libertad controlada, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado receptor.

4. La autoridad judicial del Estado remitente solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se tramitará por vía diplomática.

5. Para los efectos del presente artículo, la autoridad competente del Estado receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

ARTICULO X

MENOR BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL

El presente Convenio se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de las medidas de seguridad que se apliquen a tales menores de edad, se cumplirá de acuerdo a las leyes del Estado receptor. Para la transferencia se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor.

ARTICULO XI

FACILIDADES DE TRANSITO

1. Si cualquiera de las Partes celebrara un Convenio para la transferencia de personas condenadas con un tercer Estado, la otra Parte deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio, de las personas condenadas en virtud de dicho Convenio.

2. El Estado que tenga intención de efectuar tal transferencia, deberá dar aviso previo de ésta a la otra Parte.

ARTICULO XII

APLICACION TEMPORAL

El presente Convenio podrá aplicarse también al cumplimiento de condenas dictadas antes de su entrada en vigor.

ARTICULO XIII

PROSECUCION DEL CUMPLIMIENTO

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Convenio, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados para que la sentencia con pena privativa de libertad y medidas de seguridad restrictivas de libertad impuestas por el Estado remitente tengan efecto legal en el Estado receptor.

ARTICULO XIV

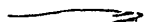
VIGENCIA DEL CONVENIO

1 El presente Convenio quedará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los treinta (30) días a partir de la fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

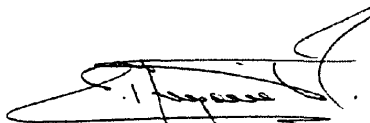
2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

En fe de lo cual los infrascritos, firman el presente Convenio.

Hecho en Lima, a los once días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos



Por la República del Perú



Por la República del Ecuador

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE
REPUBLIC OF PERU AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Republic of Peru and the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as the Parties;

Motivated by the desire to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons, through the adoption of appropriate methods;

Considering that those objectives should be achieved by granting nationals deprived of their liberty or on probation or controlled liberty as the result of a criminal judgment the opportunity to serve their sentences in their social environment of origin;

Hereby agree to enter into the following Agreement

Article I. Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. “Judgment” means the final judgment involving deprivation of liberty or restriction thereof ordered as a punishment for a crime. A judgment is understood to be final when there is no pending ordinary or extraordinary legal remedy against it in the sending State or the deadline for access to remedy has expired.

2. “Sentenced person” means a person serving a sentence imposed by a consensual or final judgement; that is, not subject to further appeal.

3. “Receiving State” means the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his or her sentence.

4. “Sending State” means the State that has imposed a sentence and from which the sentenced person may be, or has been, transferred.

5. “Sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty to be served in a penal institution, social rehabilitation centre, hospital or other institution in the sending State, imposed by a judicial body, with a term or an unspecified term on account of a criminal offence.

6. “Minor” means a person under 18 years of age.

Article II. General principles

1. The Parties undertake, in accordance with the provisions of this Agreement, to afford each other the widest possible measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.

2. A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the other Party, in accordance with the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed. To that end, he or she may express his or her interest to the sending State or to the receiving State in being transferred under this international instrument.

3. Transfer may be requested by either the sending State or the receiving State.

Article III. Conditions for transfer

This Agreement shall apply under the following conditions:

1. If the sentenced person is a national of the receiving State.
2. If at the time the request for transfer is made there are at least six months of the sentence remaining.
3. If the judgment is final or definitive and there are no ordinary remedies pending at the time the provisions of the Agreement are invoked.
4. The person transferred may not be tried again in the receiving State for the offence that gave rise to the sentence imposed by the sending State and his or her subsequent transfer.
5. If the transfer is consented to by the sentenced person or, when in view of his or her age or his or her physical or mental condition, one of the Parties considers it necessary, by a person authorized to act on his or her behalf.
6. If the sentenced person has paid or guaranteed, to the satisfaction of the sending State, payment of fines, trial costs, civil reparation and pecuniary judgments of all kinds for which he or she is responsible in accordance with the provisions of the judgment. Sentenced persons who can adequately prove their absolute insolvency are exempt in this regard.
7. If the sending State and the receiving State expressly state their consent to the transfer.
8. If a death penalty or penalty contrary to the domestic laws of the receiving State has been commuted.

Article IV. Obligation to furnish information

1. The States Parties undertake to bring this Agreement to the attention of any sentenced person to whom it might be applied.
2. If the sentenced person has expressed his or her desire to the sending State in being transferred under this Agreement, that State shall so inform the receiving State as soon as practicable after the judgment becomes final.
3. The information shall include:
 - (a) The name, date and place of birth of the sentenced person;
 - (b) His or her address, if any, in the receiving State;
 - (c) A statement of the facts upon which the sentence was based;
 - (d) The nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - (e) A certified copy of the judgment; and
 - (f) Any other information that the receiving State might require to enable it to consider the possibility of transfer, as well as to inform the sentenced person and the sending State of the consequences of transfer for the sentenced person under its laws.
4. If the sentenced person has expressed an interest to the receiving State in being transferred, the sending State shall inform that State, at his or her request, of the information referred to in subparagraph 3, above.

5. The sentenced person shall be informed, in writing, of any action taken by the sending State or the receiving State pursuant to the preceding paragraphs, as well as of any decision taken by either State on a request for transfer.

Article V. Requests for transfer

1. Every transfer of sentenced Ecuadorian persons shall be initiated by a written request submitted by the Embassy of the Republic of Ecuador to the Ministry of Foreign Affairs of Peru.

2. Every transfer of sentenced Peruvian persons shall be initiated by a written request submitted by the Embassy of the Republic of Peru to the Ministry of Foreign Affairs of Ecuador.

3. If the sending State considers the request for transfer of the sentenced person and expresses its consent, the sending State shall inform the receiving State as soon as possible of its approval, so that transfer may be effected after completion of internal arrangements.

4. The sentenced person shall be delivered by the authorities of the sending State to those of the receiving State at a place agreed upon by the Parties. The receiving State shall be responsible for the custody of the sentenced person and his or her transport from the sending State. A record shall be made of delivery.

5. In taking the decision on the transfer of a sentenced person and in accordance with the purpose of the transfer, namely to contribute positively to his or her social rehabilitation, the authority of each Party shall consider, among other factors, the gravity of the offence and the perpetrator's possible links to organized crime, his or her state of health and any social ties that he or she might have in the sending State and the receiving State.

6. When either Party does not approve the transfer of a sentenced person, it shall promptly inform the other Party of its decision, and may express the cause or grounds for refusal.

7. After refusal of authorization to transfer, the receiving State may not make a new request, but the sending State may review its decision at the request of the receiving State should it claim that there are exceptional circumstances.

8. Before transfer is effected, the sending State shall afford an opportunity to the receiving State, if it so requests, to verify through an official appointed through the diplomatic channel by the receiving State in accordance with its laws, that the consent of the sentenced person has been expressed voluntarily and with full knowledge of the legal consequences inherent therein.

9. Expenses incurred owing to the transfer shall be borne by the receiving State. However, the receiving State may seek return by the sentenced person of all or part of the expenses of transfer.

Article VI. Supporting documents

1. At the request of the sending State, the receiving State shall furnish the sending State with the following documents:

(a) A copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the sending State constitute a criminal offence; and

(b) A statement of the effect, in relation to the sentenced person, of any relevant law or regulation relating to his or her detention in the receiving State after his or her transfer.

2. If a transfer is requested, the sending State shall furnish the receiving State with the following documents, unless either State has already indicated that it will not agree to the transfer:

- (a) A certified true copy of the judgment and the law on which it is based;
- (b) A statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any detention, preventive detention, remission of sentence or other factor relevant to the enforcement of the sentence;
- (c) A declaration containing the consent to the transfer as referred to in paragraph 5 of article III granted before a competent consular authority; and
- (d) Whenever appropriate, any medical or social report on the sentenced person, information about his or her treatment in the sending State and any recommendation for his or her further treatment in the receiving State.

3. If the receiving State considers that the reports furnished by the sending State are not sufficient to enable it to implement this Agreement, it may request additional information.

4. Any documents furnished by one State to the other under this Agreement shall be exempt from legalization requirements.

Article VII. Information on enforcement

The receiving State shall furnish the sentencing State Party with information concerning the enforcement of the sentence:

- (a) When enforcement of the sentence has been completed;
- (b) If the sentenced person has escaped; or
- (c) If the sending State requests a special report.

Article VIII. Jurisdiction

The sending State shall retain full jurisdiction for the sentence imposed and any other procedure that provides for the review of sentences issued by its courts. The sending State shall also retain the power to grant pardon, amnesty or mercy to the sentenced person. The receiving State, upon receiving notice of any decision in this regard, shall promptly take the corresponding measures.

Article IX. Enforcement of the sentence

1. The execution of the penalty shall be governed by the laws of the penitentiary system of the receiving State. In no case may the nature or duration of the sentence involving deprivation of liberty issued by the sending State be modified.

2. No sentence involving deprivation of liberty shall be executed by the receiving State in such a way as to extend the duration of deprivation of liberty beyond the term imposed by the sentence of the court of the sending State.

3. If a national of one party is serving a conditional sentence imposed by the other Party or is similarly on probation, subject to controlled or early release or on parole, he or she may serve that sentence under the supervision of the authorities of the receiving State.

4. The judicial authority of the sending State shall request the supervisory measures of its concern through letters rogatory that will be processed through the diplomatic channel.

5. For the purposes of this article, the competent authority of the receiving State may take the requested supervisory measures and shall keep the party submitting the request informed of how they are implemented and shall inform it immediately of failure by the sentenced person to comply with the obligations assumed.

Article X. Minors subject to special treatment

This Agreement shall apply to minors subject to special treatment in accordance with the laws of the Parties. Any security measures applied to such minors shall be executed in accordance with the laws of the receiving State. Transfer of minors shall require the express consent of their legal representative prior to transfer.

Article XI. Transit facilities

1. If either Party enters into an agreement for the transfer of sentenced persons with a third State, the other Party shall cooperate by facilitating transit through its territory of sentenced persons under that agreement.

2. The State intending to effect such a transfer shall give advance notice thereof to the other Party.

Article XII. Temporal application

This Agreement may also be applied to the enforcement of sentences issued before its entry into force.

Article XIII. Continued enforcement

In order to achieve the purposes of this Agreement, each Party shall take the necessary legislative measures and establish the adequate administrative procedures to ensure that sentences involving the deprivation of liberty and security measures that restrict liberty imposed by the sending State have legal effect in the receiving State.

Article XIV. Duration of the Agreement

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the exchange of the respective ratification instruments.

2. This Agreement shall be of unlimited duration. Either Party may denounce it by giving notice in writing through the diplomatic channel. Denunciation shall become effective 180 days after such notice has been given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Agreement.

DONE at Lima on 11 August 1999, in two original copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Peru :

[SIGNÉ]

For the Republic of Ecuador :

[SIGNÉ]

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES CONCLU ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

La République du Pérou et la République de l'Équateur, ci-après dénommées les Parties,
Motivées par le désir de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées, par
l'adoption de méthodes appropriées,

Considérant qu'il convient de réaliser ces objectifs en accordant aux ressortissants privés de
liberté ou en liberté surveillée ou contrôlée à la suite d'un jugement rendu en matière pénale la
possibilité de purger leur peine dans leur milieu social d'origine,

Sont convenues de conclure l'Accord suivant :

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « jugement » désigne un jugement définitif impliquant une privation ou une
restriction de liberté ordonnée en tant que sanction d'une infraction. Un jugement est considéré
comme définitif lorsqu'aucun recours ordinaire ou extraordinaire n'est en cours contre lui dans
l'État d'envoi ou lorsque le délai prévu pour l'accès aux recours a expiré.

2. Le terme « personne condamnée » désigne une personne purgeant une peine imposée par
un jugement consensuel ou définitif, c'est-à-dire non susceptible d'appel ultérieur.

3. Le terme « État d'accueil » désigne l'État vers lequel la personne condamnée peut être
transférée ou l'a été afin de purger sa peine.

4. Le terme « État d'envoi » désigne l'État dans lequel la peine a été prononcée et duquel la
personne condamnée peut être transférée ou l'a été.

5. Le terme « peine » désigne toute sanction ou mesure privative de liberté à purger dans un
établissement pénitentiaire, un centre de réadaptation sociale, un hôpital ou une autre institution de
l'État d'envoi, de durée déterminée ou indéterminée, prononcée par une instance judiciaire et
sanctionnant une infraction pénale.

6. Le terme « mineur »

désigne une personne âgée de moins de 18 ans.

Article II. Principes généraux

1. Les Parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent Accord, à coopérer le
plus étroitement possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut être transférée dans l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent Accord, afin d'y purger la peine prononcée. À cette fin, elle peut exprimer à l'État d'envoi ou à l'État d'accueil son souhait d'être transférée en vertu du présent instrument international.

3. Le transfèrement peut être demandé par l'État d'envoi ou par l'État d'accueil.

Article III. Conditions du transfèrement

Le présent Accord s'applique dans les conditions suivantes :

1. Si la personne condamnée est un ressortissant de l'État d'accueil.

2. Si, au moment où la demande de transfèrement est présentée, il reste au moins six mois de la peine à purger.

3. Si le jugement est final ou définitif et qu'il n'y a aucun recours ordinaire en cours au moment où les dispositions de l'Accord sont invoquées.

4. La personne transférée ne peut pas être rejugée dans l'État d'accueil pour l'infraction qui a donné lieu à la peine prononcée par l'État d'envoi et à son transfèrement ultérieur.

5. Si la personne condamnée ou, lorsque l'une des deux Parties l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental de celle-ci, une personne habilitée à agir en son nom a consenti au transfèrement.

6. Si la personne condamnée a payé les amendes, les frais de justice, les réparations civiles et les sanctions pécuniaires de toute nature dont elle est responsable conformément aux dispositions du jugement, ou en a garanti le paiement, à la satisfaction de l'État d'envoi. Les personnes condamnées qui peuvent prouver de manière adéquate leur insolvabilité absolue sont exemptées de cette condition.

7. Si l'État d'envoi et l'État d'accueil déclarent expressément leur consentement au transfèrement.

8. Si une peine de mort ou une peine contraire à la législation interne de l'État d'accueil a été commuée.

Article IV. Obligation de fournir des informations

1. Les États parties s'engagent à porter le présent Accord à l'attention de toute personne condamnée à laquelle il pourrait être appliqué.

2. Si la personne condamnée a exprimé à l'État d'envoi son souhait d'être transférée en vertu du présent Accord, cet État en informe l'État d'accueil le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.

3. Les informations suivantes doivent être fournies :

- a) le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
- b) le cas échéant, son adresse dans l'État d'accueil ;
- c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
- d) la nature, la durée et la date du début de la peine ;
- e) une copie certifiée conforme du jugement ;

f) toute autre information dont l'État d'accueil pourrait avoir besoin pour envisager la possibilité d'un transfèrement, ainsi que pour informer la personne condamnée et l'État d'envoi des conséquences du transfèrement pour la personne condamnée en vertu de sa législation.

4. Si la personne condamnée a fait part à l'État d'accueil de son souhait d'être transférée, l'État d'envoi communique à l'État d'accueil, à la demande de la personne condamnée, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. La personne condamnée est informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État d'envoi ou l'État d'accueil en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet d'une demande de transfèrement.

Article V. Demandes de transfèrement

1. Tout transfèrement de personnes équatoriennes condamnées est introduit par une demande écrite présentée par l'ambassade de la République de l'Équateur au Ministère des affaires étrangères du Pérou.

2. Tout transfèrement de personnes péruviennes condamnées est introduit par une demande écrite présentée par l'ambassade de la République du Pérou au Ministère des affaires étrangères de l'Équateur.

3. Si l'État d'envoi, après avoir examiné la demande de transfèrement de la personne condamnée, exprime son consentement, il informe l'État d'accueil de son approbation dans les meilleurs délais afin que le transfèrement puisse être effectué une fois les arrangements internes achevés.

4. La personne condamnée est remise par les autorités de l'État d'envoi aux autorités de l'État d'accueil en un lieu convenu par les Parties. L'État d'accueil est responsable de la garde de la personne condamnée et de son transport depuis l'État d'envoi. Un procès-verbal est établi lorsque la personne condamnée est remise à l'État d'accueil.

5. Pour décider de transférer une personne condamnée, conformément à l'objectif du transfèrement, à savoir de contribuer positivement à la réinsertion sociale de la personne condamnée, les autorités de chaque Partie prennent en considération, entre autres facteurs, la gravité de l'infraction et les liens éventuels de l'auteur avec la criminalité organisée, ainsi que son état de santé et ses liens sociaux éventuels dans l'État d'envoi et dans l'État d'accueil.

6. Lorsque l'une des Parties n'approuve pas le transfèrement d'une personne condamnée, elle informe rapidement l'autre Partie de sa décision et peut indiquer la raison ou les motifs de son refus.

7. Après un refus de l'autorisation de transfèrement, l'État d'accueil ne peut pas effectuer de nouvelle demande, mais l'État d'envoi peut revoir sa décision à la demande de l'État d'accueil si ce dernier invoque l'existence de circonstances exceptionnelles.

8. Avant que le transfèrement ne soit effectué, l'État d'envoi donne à l'État d'accueil, si ce dernier le demande, la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire désigné par la voie diplomatique par l'État d'accueil conformément à sa législation, que la personne condamnée a donné son consentement volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

9. Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l'État d'accueil. Toutefois, l'État d'accueil peut demander le remboursement par la personne condamnée de tout ou partie des frais de transfèrement.

Article VI. Documents justificatifs

1. À la demande de l'État d'envoi, l'État d'accueil fournit à l'État d'envoi les documents suivants :

- a) une copie de la loi pertinente de l'État d'accueil indiquant que les actes ou omissions sanctionnés par la peine prononcée dans l'État d'envoi constituent une infraction pénale ;
- b) une déclaration concernant l'effet, pour la personne condamnée, de toute loi ou règle pertinente ayant trait à sa détention dans l'État d'accueil après son transfèrement.

2. Si un transfèrement est demandé, l'État d'envoi doit fournir les documents suivants à l'État d'accueil, à moins que l'un ou l'autre des deux États n'ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son autorisation pour le transfèrement :

- a) une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales sur lesquelles il est fondé ;
- b) une déclaration indiquant la durée de la peine déjà exécutée, y compris les informations relatives à toute détention, détention provisoire, remise de peine ou à tout autre acte concernant l'exécution de la peine ;
- c) une déclaration contenant le consentement au transfèrement tel que visé au paragraphe 5 de l'article III, accordé devant une autorité consulaire compétente ;
- d) chaque fois qu'il y a lieu, tout rapport médical ou social relatif à la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État d'envoi et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'État d'accueil.

3. Si l'État d'accueil estime que les rapports fournis par l'État d'envoi ne sont pas suffisants pour lui permettre d'appliquer le présent Accord, il peut demander des informations supplémentaires.

4. Tout document fourni par un État à l'autre au titre du présent Accord est exempté des exigences de législation.

Article VII. Informations concernant l'exécution

L'État d'accueil fournit à l'État partie d'envoi des informations concernant l'exécution de la peine :

- a) lorsque l'exécution de la peine est achevée ;
- b) si la personne condamnée s'est évadée ;
- c) ou si l'État d'envoi lui demande un rapport spécial.

Article VIII. Compétence

L'État d'envoi conserve sa pleine compétence pour la peine prononcée et pour toute autre procédure prévoyant le réexamen des peines prononcées par ses tribunaux. L'État d'envoi conserve également le pouvoir d'accorder la grâce, l'amnistie ou la clémence à la personne condamnée. L'État d'accueil, dès qu'il est informé de toute décision à cet égard, prend sans délai les mesures correspondantes.

Article IX. Exécution de la peine

1. L'exécution de la peine est régie par la législation relative au système pénitentiaire de l'État d'accueil. En aucun cas la nature ou la durée de la peine privative de liberté prononcée par l'État d'envoi ne peuvent être modifiées.
2. Aucune peine privative de liberté n'est appliquée par l'État d'accueil de manière à prolonger la durée de la privation de liberté au-delà de la durée imposée par la peine prononcée par le tribunal de l'État d'envoi.
3. Si un ressortissant d'une Partie est condamné à une peine de sursis probatoire par l'autre Partie ou est, de même, en probation, en liberté contrôlée ou anticipée ou en liberté conditionnelle, il peut purger cette peine sous la surveillance des autorités de l'État d'accueil.
4. La juridiction d'instruction de l'État d'envoi demande les mesures de contrôle qu'elle désire par des commissions rogatoires qui seront traitées par la voie diplomatique.
5. Aux fins du présent article, l'autorité compétente de l'État d'accueil peut prendre les mesures de surveillance demandées, tient la Partie qui présente la demande informée de la manière dont ces mesures sont mises en œuvre et l'informe immédiatement de tout manquement de la personne condamnée à ses obligations.

Article X. Mineurs soumis à un traitement spécial

Le présent Accord s'applique aux mineurs faisant l'objet d'un traitement spécial conformément aux lois des Parties. Toute mesure de sécurité appliquée à ces mineurs doit être exécutée conformément aux lois de l'État d'accueil. Le transfèrement des mineurs nécessite le consentement exprès préalable de leur représentant légal.

Article XI. Facilités de transit

1. Si l'une des Parties conclut un accord pour le transfèrement des personnes condamnées avec un État tiers, l'autre Partie coopère en facilitant le transit des personnes condamnées par son territoire dans le cadre dudit accord.
2. L'État qui a l'intention d'effectuer un tel transfèrement en donne un préavis à l'autre Partie.

Article XII. Application dans le temps

Le présent Accord peut également être appliqué à l'exécution des peines prononcées avant son entrée en vigueur.

Article XIII. Poursuite de l'exécution

Afin de réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie prend les mesures législatives nécessaires et établit les procédures administratives adéquates pour garantir que les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité restrictives de liberté imposées par l'État d'envoi ont un effet juridique dans l'État d'accueil.

Article XIV. Durée de l'Accord

1. Le présent Accord est soumis à ratification et entre en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification entre les Parties.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer par une notification écrite par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés signent le présent Accord.

FAIT à Lima, le 11 août 1999, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République du Pérou :

[SIGNÉ]

Pour la République de l'Équateur :

[SIGNÉ]